



REFERENCIA: RECURSO DE APELACIÓN- ORDINARIO LABORAL
DEMANDANTE: EDWIN ARLEY ESCOBAR LUJÁN
DEMANDADOS: MISIÓN EMPRESARIAL Y OTROS
PROCEDENCIA: JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
RADICADO: 05001-31-05-022-2016-00766-01

Medellín, veintiséis (26) de julio de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, procede a resolver el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la apoderada judicial de MISIÓN EMPRESARIAL S.A. contra el auto del 02 de marzo de 2020, dictado por el JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, mediante el cual se declaró probada la excepción previa de “FALTA DE COMPETENCIA”, propuesta por la ESU, en el proceso ordinario laboral de primera instancia, instaurado por el señor **EDWIN ARLEY ESCOBAR LUJÁN** contra **MISIÓN EMPRESARIAL S.A., EMPLEAMOS S.A., la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU-.,** en el que intervienen como llamados en garantía de esta última entidad **COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS y CHUBB SEGUROS S.A.,** proceso al que también fue vinculado como litisconsorte necesario por pasiva el **MUNICIPIO DE MEDELLÍN.**

El presente asunto fue debidamente discutido por los integrantes de la Sala, acogiéndose el proyecto de providencia presentado por el Magistrado Ponente FRANCISCO ARANGO TORRES, consignado en los siguientes términos:

ANTECEDENTES

El actor formuló demanda ordinaria laboral contra MISIÓN EMPRESARIAL S.A., EMPLEAMOS S.A., y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU-., para que se declare que dichas empresas despidieron al demandante sin justa causa y en estado de estabilidad reforzada, ordenando en consecuencia el reintegro laboral, los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir, o de forma subsidiaria, la indemnización por despido sin justa causa, la sanción del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 y la sanción moratoria o en subsidio la indexación.

La demandada la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU- en la contestación de la demanda propuso la excepción previa de FALTA DE COMPETENCIA, al considerar que como como en este caso no se había agotado la vía gubernativa previo a iniciar algún tipo de acción ante la jurisdicción laboral, por tal motivo y omitiendo este requisito de procedibilidad, el Despacho de instancia carecía de competencia para conocer del asunto.

DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO DE APELACIÓN.

La oficina judicial de la primera instancia, en decisión del 02 de marzo de 2020, declaró probada la excepción de FALTA DE COMPETENCIA propuesta por la ESU y en consecuencia, excluyó del litigio a esta entidad, al MUNICIPIO DE MEDELLÍN y a las llamadas en garantía por la ESU, COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS y CHUBB SEGUROS S.A.

Argumentó el *a quo*, que a la luz de lo dispuesto en el artículo 6 del CPL y de la SS, las acciones contenciosas contra la nación, las entidades territoriales y cualquier otra de la administración pública, solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación, pero en este caso, en el plenario no había prueba del agotamiento de la reclamación administrativa, por lo que siguiendo la línea trazada por la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Laboral, dicho requisito es un factor de competencia para el juez laboral y que como tal debe estar satisfecha en el momento de admisión de la demanda, pues constituye uno de los llamados presupuestos procesales, cuyo cumplimiento es necesario para la constitución regular de la relación jurídico procesal.

Esta decisión fue recurrida en reposición por la parte demandante, solicitando la no desvinculación del litigio de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU-. y del MUNICIPIO DE MEDELLÍN, no obstante, el juez negó la reposición pretendida.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de MISIÓN EMPRESARIAL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra el auto que declaró probada la excepción previa de “FALTA DE COMPETENCIA”, al considerar que los efectos de desvinculación del presente litigio de la accionada EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU-, también le deben ser extendidos a MISIÓN EMPRESARIAL S.A., toda vez que esta empresa actúa en el proceso en calidad de litisconsorte necesario de la ESU, tal y como está planteado en las pretensiones de la demanda y en los

supuestos fácticos de la misma, por lo que debió beneficiarse de las decisiones adoptadas frente al litisconsorte necesario.

Con todo, señala que aunque en la demanda lo que se pretende de MISIÓN EMPRESARIAL S.A., EMPLEAMOS S.A., y la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU-, son las mismas pretensiones, significa que se esta en presencia de la figura de litisconsortes necesarios, pero lo que busca el demandante en el trasfondo de la decisión, es que declare que la ESU era su verdadero empleador.

ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA.

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, los apoderados judiciales del DEMANDANTE, CHUBB SEGUROS y MISIÓN EMPRESARIAL S.A., presentaron oportunamente escrito de alegaciones en los siguientes términos que textualmente se transcriben:

ALEGATOS DEL DEMANDANTE:

1. “El día 02 de marzo de 2020, se celebró audiencia del art. 77 del C.P.L.S.S., dónde se declaró probada la excepción previa propuesta por la ESU, de que a falta del requisito del agotamiento de la reclamación administrativa ante la entidad, y previa a la presentación de la demanda, esta adolecía de los requisitos mínimos para su presentación, por lo que debía ser excluida esta entidad, junto con las compañías aseguradoras que los respaldan en llamamiento en garantía, ordenando su desvinculación del proceso.
2. ES de anotar, que no estoy de acuerdo con la decisión tomada, por cuanto según la sentencia **C-893/01, el artículo 6 del C.P.L.S.S, fue declarado inexecutable, tal y como se evidencia en esta argumentación:**

“En lo que se refiere a la conciliación como requisito de procedibilidad de la acción laboral, la norma quebranta abiertamente el principio constitucional contenido en el artículo 53 de la Carta, según el cual, corresponde a la Ley tener en cuenta la facultad de los trabajadores para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles, la cual se ve afectada cuando se exige al particular acudir a la conciliación como requisito previo a la presentación de la demanda.

Por las mismas razones, resulta inconstitucional el inciso segundo de la disposición que se comenta según el cual la “conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad suplirá la vía gubernativa cuando la ley la exija.”. Esta decisión legislativa tampoco es acorde con el espíritu general de la conciliación, porque si bien busca prescindir del procedimiento contencioso administrativo laboral en asuntos que

recaen sobre materia conciliable, agilizando la resolución del conflicto mediante la omisión una de las etapas del litigio contencioso administrativo que es la vía gubernativa, de todas formas parte del supuesto de la obligatoriedad de la conciliación que, tal como se advirtió, es a todas luces contraria al Ordenamiento Superior.

Desde otro ángulo de análisis puede afirmarse que la inconstitucionalidad del requisito de procedibilidad en asuntos laborales es contrario al conjunto de disposiciones superiores que le atribuyen al trabajo la condición de derecho fundamental y le imponen al Estado el deber de brindarle especial protección.

Efectivamente, la Constitución Política de 1991, además de enmarcar a Colombia como Estado Social de Derecho (art. 2°), prodiga al trabajo una especial protección de parte del Estado. De ahí que cuando se desconocen los derechos consagrados a favor de un trabajador, éste debe gozar de los mecanismos expeditos de acción para defenderlos ante las autoridades competentes, sin condicionamientos que enerven la efectividad de los mismos.

Corolario de lo anterior es el precepto 53 de la Carta Fundamental, que le señala al Estatuto del Trabajo la obligación de instituir unos principios mínimos fundamentales, entre otros, los de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima, vital y móvil; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos contenidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; garantía a la seguridad social; y facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles.

Todo este elenco de normas protectoras, que arranca del presupuesto indubitable de la diferencia en la relación individual de trabajo donde existe una parte, el trabajador, en condición de inferioridad, podría quedar enervado, o al menos seriamente amenazado, si el titular de los derechos que le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas impuestas por el legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito.

El carácter social de estos derechos -que muchas veces tienen incluso un contenido vital-, y la especial tutela estatal que se brinda constitucionalmente a los mismos, exige que el acceso a la justicia no pueda estar diferido ni obstaculizado por una condición de procedibilidad impuesta aún contra la voluntad del beneficiario, con mayor razón si para ese trámite obligatorio previo al proceso se contempla la posibilidad de que el titular del derecho tenga en ocasiones que sufragar de su propio peculio, muchas veces escaso, expensas significativas para poder accionar ante los jueces”.

3. Además de ello, en sentencia C-792 de 2006, la Corte Constitucional decretó que este agotamiento de la vía gubernativa en los casos donde el demandado sea una entidad del estado, es optativo del administrado, es decir, no es una obligación o requisito que debe cumplir previo a la presentación de la demanda, sino que es potestad del demandante enviarle una reclamación administrativa a la entidad que será demandada, y esperar que este dé respuesta para poder agotar la vía gubernativa, normatividad que el señor Juez no valoró al momento de dictar auto de declaración de excepciones previas, desconociendo la jurisprudencia al respecto.

4. De todas formas, a lo largo de este proceso se evidencia como el señor Edwin Arley Escobar Luján puso en conocimiento previamente a la ESU y al municipio de Medellín de la reclamación de sus derechos laborales, tales como lo evidencia la reforma a la demanda, la cual fue radicada el día 04 de mayo de 2017, y que donde se aportó al Despacho las copias de recibido de 3 derechos de petición radicados ante la ESU, los cuáles no fueron respondidos hasta la fecha, además de la tutela interpuesta en contra de la ESU con la respectiva respuesta dada por dicha entidad, y cuya copia reposa en el expediente, donde se evidencia que la entidad ya tenía pleno conocimiento de la acción adelantada por parte de mi mandante, y por lo tanto, no estaba sujeto a la obligación de presentar una reclamación administrativa como tal, por cuanto la entidad ya estaba notificada por conducta concluyente de la reclamación que hacia mi mandante de sus derechos laborales, como el derecho a la estabilidad laboral reforzada.

PETICION

Solicito respetuosamente al despacho REVOCAR el auto del 02 de marzo de 2020, en el aparte donde se declaró probada la excepción previa propuesta por la ESU, por resultar contraria a la jurisprudencia y la normativa vigente.”

ALEGATOS DE MISIÓN EMPRESARIAL S.A.

“Nos ratificamos en todos los puntos y argumentos expuestos al interponer y sustentar el recurso de apelación.

Ahora bien, de la forma en que están redactadas las pretensiones de la demanda, (ver pretensión primera, segunda, tercera y cuarta) podemos concluir que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD RBA, como MISIÓN EMPRESARIAL S.A. **son litisconsortes necesarios**. Sin que sea cito como de manera errónea lo planteo el A quo que se trate de un litisconsorte facultativo, pues no se trata de litigantes separados, como lo indica el art. 60 del CGP, sino que se trata de personas que deben de comparecer al proceso sin que sea posible decidir de fondo sin la presencia de todos ellos, tal y como lo regula el art. 61 del CGP.

ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. *Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, **por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones** o que*

intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante dicho término.

Si alguno de los convocados solicita pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas y si las decreta fijará audiencia para practicarlas.

Los recursos y en general las actuaciones de cada litisconsorte favorecerán a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio solo tendrán eficacia si emanan de todos.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su vinculación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio.” Subraya fuera de texto)

Por lo tanto, al ser litisconsortes necesarios, tanto por la forma en que están redactados los hechos de la demanda, como están planteadas las pretensiones de esta, cualquier decisión que se adopte frente a uno de los litisconsortes deberá beneficiar a los otros tal y como lo regula el inciso cuarto del mencionado artículo.

En el caso objeto de estudio, al haber sido declarada prospera la excepción previa de falta de competencia, y ordenar desvincular la ESU, MISIÓN EMPRESARIAL S.A. debió beneficiarse de las consecuencias de la declaración de esta excepción en aplicación a los regulado en nuestro ordenamiento jurídico.

Por las razones expuestas al momento de interponer y sustentar el recurso de apelación, como las argumentaciones anteriores solicito respetuosamente al H. Tribunal, REVOQUE PARCIALMENTE la decisión, y extienda los beneficios de la declaratoria de prosperidad de la excepción a MISIÓN EMPRESARIAL S.A.”

ALEGATOS DE CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

“1.-En primer lugar, habrá de indicarse que esta defensa judicial comparte en su totalidad las motivaciones del auto que decidió las excepciones previas emitida en primera instancia por el JUEZ VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, el cual dentro de sus argumentos para decidir las excepciones previas consideró que se debía desvincular a la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., toda vez que el demandante no probó haber agotado reclamación administrativa ante esta,

en atención a que es una empresa industrial y comercial del estado de carácter público.

El recurrente precisa estar conforme con esta decisión de desvinculación y solicita que también sea desvinculada del proceso a su representada MISIÓN EMPRESARIAL S.A., porque en su sentir, se configura un litisconsorcio necesario y por ende, el beneficio de exclusión de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., el MUNICIPIO DE MEDELLÍN y de la llamada en garantía CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. debe hacerse extensivo también a MISIÓN EMPRESARIAL S.A.

Al respecto, la suscrita manifiesta respetuosamente que no está de acuerdo con la solicitud elevada por el apoderado judicial de MISIÓN EMPRESARIAL S.A., en razón a que lo que se configura en este proceso es un LITISCONSORCIO FACULTATIVO, que se presenta cuando la presencia de los sujetos que lo integran no es requisito para la debida integración del contradictorio, porque ostentan relaciones jurídicas independientes respecto de la otra parte procesal y solo por razones de conveniencia o de economía concurren a un mismo proceso; la conformación de este tipo de litisconsorcio depende de la voluntad de cada una de las personas que lo integran y su ausencia no vicia la validez del proceso.

En este caso, tenemos que el mismo actor indicó en los hechos de la demanda que los contratos laborales suscritos fueron con MISIÓN EMPRESARIAL S.A. y así lo demostró con las documentales allegadas, además si bien, se aportó un contrato de trabajo con la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., lo cierto es que ambas sociedades son independientes y autónomas, por ende, entre estos sujetos procesales no surge un presupuesto procesal de integración obligatoria, sino que queda a criterio del demandante su vinculación.

Ahora bien, si bien es cierto que el demandante quiso vincular a las tres empresas como demandadas MISIÓN EMPRESARIAL S.A., EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y MUNICIPIO DE MEDELLÍN, no es menos cierto que la primera es de carácter privado y las últimas dos entidades son de carácter público, por ende, el juez ordinario laboral carece de competencia para decidir su responsabilidad.

Al respecto, basta con leer detenidamente los certificados de existencia y representación legal para establecer su carácter público y privado.

Así las cosas, tenemos que MISIÓN EMPRESARIAL S.A. es una SOCIEDAD COMERCIAL ANÓNIMA de carácter privado conformada por socios particulares, por su parte, la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. es una EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN es un ENTE TERRITORIAL.

Por lo anterior, no le asiste razón al recurrente al considerar que su representada MISIÓN EMPRESARIAL S.A. debe correr con la misma suerte de la ESU y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, pues como se explicó anteriormente, su naturaleza jurídica no es pública. En tal medida, ante esta sociedad el demandante no debía agotar reclamación administrativa, como si lo debió hacer con la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, sin que el actor efectuara la debida reclamación.

Ahora bien, atendiendo el argumento del apoderado de MISIÓN EMPRESARIAL S.A., que indicó que el litisconsorcio necesario se presenta cuando la cuestión litigiosa tiene por objeto una relación jurídica material, única e indivisible, que debe resolverse de manera uniforme para todos los sujetos que integran la parte correspondiente, lo cual impone su comparecencia obligatoria al proceso por ser un requisito imprescindible para adelantarlos válidamente.

Es importante resaltar que el elemento diferenciador de este litisconsorcio con el facultativo es el carácter imperioso de la relación sustancial materia del litigio: mientras que en el litisconsorcio facultativo los sujetos tienen relaciones jurídicas independientes, en el necesario existe una unidad inescindible respecto del derecho sustancial en debate.

En síntesis, en primer lugar, las codemandadas MISIÓN EMPRESARIAL S.A. y EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. tienen naturaleza jurídica distinta, la primera hace parte de la esfera privada y la segunda de la pública.

En segundo lugar, ambas empresas fueron llamadas a este proceso como demandadas cada una con distintos contratos laborales firmados con el demandante EDWIN ARLEY ESCOBAR LUJAN.

II.-Frente a los argumentos esbozados anteriormente, me permito indicar los sustentos normativos y jurisprudenciales que apoyan la decisión tomada por el *aquo* y la solicitud de esta apoderada de mantener incólume la misma.

El artículo 6º del Código Procesal del Trabajo dispone que las acciones contra la Nación, las entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa.

La Corte Constitucional en la sentencia C-792 de 2006, al estudiar el aludido artículo precisó lo siguiente:

“En el artículo 6º del C.P.L.S.S. se adoptó una modalidad especial de aseguramiento de la oportunidad para la autotutela administrativa, porque al señalarse que la reclamación administrativa cuyo agotamiento es presupuesto para ocurrir ante la justicia ordinaria laboral, consiste en el simple reclamo escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretenda, la sustrae del ámbito del agotamiento de la vía gubernativa previsto en el C.C.A. como requisito para que los particulares puedan acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a demandar los actos administrativos unilaterales y definitivos de carácter particular y concreto, para someterla a una regulación más general y sencilla, conforme a la cual, en todos los eventos en que se pretenda demandar a una entidad pública ante la justicia ordinaria laboral, un presupuesto de procedibilidad de la acción es esa previa reclamación administrativa”

Así las cosas, a efectos de determinar si ante la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., como sociedad de economía mixta, era necesario presentar la reclamación administrativa cuando se pretende el reconocimiento de los derechos derivados de un contrato de trabajo, traigo a colación el criterio expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-736 de 2007, según el cual dichas sociedades hacen parte de la administración pública:

“3.2.2 La pertenencia de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva del poder público. En primer lugar, la Corte repara en que las sociedades de economía mixta son mencionadas en la Constitución a propósito de las atribuciones (del Congreso, asambleas o concejos) de “determinar la estructura de la Administración.” Ciertamente, los artículos 150 numeral 7, 300 numeral 7 y 313 numeral 6 tienen como elemento común el conceder facultades a esos órganos colegiados para ese concreto propósito.¹ De donde se deduce

que la Constitución incluye a las sociedades de economía mixta dentro de la “estructura de la Administración”.

Por su parte, el artículo 115 de la Constitución, que pertenece al Capítulo I del Título V, relativo a la Estructura del Estado, al señalar los órganos que conforman la Rama Ejecutiva del poder público, no menciona a las sociedades de economía mixta. Esta circunstancia, sin embargo, no significa que este tipo de entidades se encuentre por fuera de este concepto, es decir, de la lectura del artículo 115 no es posible concluir que las sociedades de economía mixta no formen parte de la Rama Ejecutiva, y que sólo conformen “la estructura de la Administración”, según lo dispuesto por los artículos 150 numeral 7, 300 numeral 7 y 313 numeral 6, que se acaban de mencionar.

Así pues, la enumeración contenida en el artículo 115 no es taxativa, de donde se deduce que otros órganos distintos de los allí mencionados pueden conformar la Rama Ejecutiva. Sin embargo, para establecer si las sociedades de economía mixta forman parte de esta Rama, la Corte aclaró que este concepto (Rama Ejecutiva) involucra el de administración centralizada y descentralizada.

Las consecuencias derivadas de la vinculación de las sociedades de economía mixta a la Rama Ejecutiva han sido destacadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que al respecto ha emitido los siguientes conceptos:

*“... es posible concluir que las sociedades de economía mixta, pese su naturaleza jurídica específica (regulación basada en las normas del derecho privado, ejecución de actividades industriales o comerciales, ánimo de lucro, entre otros aspectos) no pierden su carácter de expresiones de la actividad estatal, amén del aporte público en la constitución del capital social y la consiguiente pertenencia a la administración pública, en la condición de entidades descentralizadas. De esta manera, **no es acertado sostener que la participación de particulares en la composición accionaria y la ejecución de actividades comerciales en pie de igualdad con las sociedades privadas sean motivos para excluir a las sociedades de economía mixta de la estructura del Estado y de los controles administrativos que le son propios y cuya definición hace parte de la potestad de configuración normativa de que es titular el legislador.***

Con base en esta última consideración, la sentencia C-629/03 concluyó que *“la propia Constitución, como se ha visto, determina consecuencias directas de la circunstancia de que una sociedad comercial tenga el carácter de sociedad de economía mixta y hace imperativa la vigilancia seguimiento y control de los recursos estatales, cualquiera sea la forma de gestión de los mismos, en los términos que prevea la ley.”*

Adicionalmente, la vinculación a la Rama Ejecutiva implica que a pesar de que las sociedades de economía mixta, como entidades descentralizadas, gozan de autonomía jurídica, de todas maneras, no son organismos independientes, sino que están sujetas a cierto control por parte de la Administración central. Al respecto, la teoría general del Derecho Administrativo explica que, aunque las entidades descentralizadas por servicios no están sujetas a un control jerárquico, reservado para la administración centralizada, en cambio si son objeto de un control llamado “de tutela” por parte de las entidades a las que se vinculan.

De lo anterior se puede extraer que la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., al hacer parte de la administración pública, por su calidad de sociedad de economía mixta, obligaba al demandante EDWIN ARLEY ESCOBAR LUJAN, previo a incoar la demanda por la que pretende la solidaridad de dicha entidad, que agotara

frente a la misma la reclamación administrativa de que trata el aludido artículo 6º del Código Procesal del Trabajo, independientemente del monto del capital que el estado tenga en dicha sociedad.

SOLICITUD

Por todo lo anteriormente expuesto, solicito respetuosamente que se CONFIRME el auto apelado de fecha 02 de marzo de 2020, dictado por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín en el que se decidió desvincular al llamante en garantía EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U., al demandado MUNICIPIO DE MEDELLÍN y a mi representada CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

Se pasa a resolver previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

La Sala se ocupará del estudio del recurso de apelación, con apego al imperativo contenido en el artículo 66 A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual: *“La sentencia de segunda instancia, así como la decisión de autos apelados, deberá estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación”*.

Antes de entrar a resolver, debe aclarar esta Sala en primer lugar, que pese a que la apoderada del demandante en los alegatos de conclusión de esta instancia manifiesta que presenta una **“ampliación de Recurso de Reposición, y en subsidio apelación”** y con dicho escrito pretende de esta Colegiatura que se revoque el auto del 02 de marzo de 2020 proferido por el juez de instancia, en cuanto declaró probada la excepción previa propuesta por la ESU, lo cierto es que tal pedimento no puede ser estudiado en esta instancia, toda vez que la apoderada del actor NO presentó recurso de apelación frente a la decisión del operador de primer grado, pues su intervención, únicamente se limitó al recurso de reposición.

Tan claro es el asunto, que cuando la apoderada en la referida audiencia hizo uso de la palabra, el juez de instancia le preguntó cuál recurso interponía y esta manifestó que únicamente era el de reposición, enviando a esta magistratura el proceso para ser conocida la apelación MISIÓN EMPRESARIAL S.A., pues era la única parte que había presentado este recurso.

Conforme a lo dicho, no puede la apoderada parte demandante en esta instancia, pretender ampliar la sustentación del recurso de reposición, porque éste se presenta y se resuelve ante el juez de primera instancia, siendo a todas luces inane dicha petición, y en cuando al recurso de apelación que presenta en los alegatos de conclusión, debe decir la Sala que no es ésta la oportunidad procesal para presentarlo y mucho menos para tratar de subsanar las posibles omisiones en que incurrió.

Por lo narrado, se desatenderá el escrito presentado por la apoderada del actor, pues el mismo lo único que persigue es que se revoque la decisión del *a quo* ordenó la desvinculación de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y el MUNICIPIO DE MEDELLÍN, decisión que se encuentra en firme al no haber sido recurrida por ninguna de las partes.

Dicho lo anterior, se pasa a resolver el recurso de apelación presentado por MISIÓN EMPRESARIAL S.A., sociedad que pretende que los efectos de la decisión a la que arribó el juez de instancia de desvincular del presente litigio a EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, le sea extensiva y también se ordene su exclusión del presente litigio por tratarse de un litisconsorte necesario de la ESU.

Pues bien, en el presente asunto, la parte recurrente incurre, a juicio de la Sala, en un error de interpretación, ya que revisada las pretensiones y hechos de la demanda, no se puede considerar a MISIÓN EMPRESARIAL S.A., como un litisconsorte necesario de la ESU tal y como pretende hacerlo ver la apoderada de dicha sociedad, sino que se trata de un demandado, calidad que fue planteada desde el libelo genitor.

Ello se puede extraer por ejemplo del hecho primero de la demanda, en la que el actor afirma que *“ingresó a laborar como GESTOR OPERATIVO en la empresa MISIÓN EMPRESARIAL, empresa en la que laboró como empleado en misión para la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA ESU”* o del hecho cuarto en el que relata que *“Ha reportado varias incapacidades y recomendaciones médicas a la empresa MISIÓN EMPRESARIAL S.A. a lo largo de su relación laboral, hasta que el 18 de marzo de 2015, la empresa MISIÓN EMPRESARIAL S.A., entrega a mi poderdante la carta de terminación del contrato laboral...”*.

Adicionalmente, debe destacar la Sala, que en el hecho octavo de la demanda, narra el actor que interpuso una acción de tutela para que se le protegieran los derechos relacionados con el mínimo vital y la estabilidad laboral reforzada, tutela que fue conocida por el Juzgado Veintitrés Penal Municipal Mixto de Medellín, quien mediante

sentencia de tutela ordenó a MISIÓN EMPRESARIAL S.A. como medida transitoria, el reintegro laboral del actor sin solución de continuidad, decisión que fue acatada por esta entidad, según se extrae de la contestación de la demanda.

Tampoco puede desconocerse lo indicado por MISIÓN EMPRESARIAL S.A. en la contestación de la demanda, quien en el hecho primero aceptó que entre él y el señor EDWIN ARLEY ESCOBAR LUJÁN, se suscribieron varios contratos de trabajo. Además, también aceptó el pago de salario y la terminación del contrato, entre otros asuntos.

Lo narrado, permite concluir a esta Sala que la intervención de MISIÓN EMPRESARIAL S.A. en el proceso, conforme la demanda y su contestación por esta empresa, no se circunscribe a una especie de deudor solidario de los derechos demandado, sino como parte demandada directamente responsable de los derechos que le puedan asistir al actor, de quien entre otras pretensiones, se solicita el reintegro laboral y el consecuente pago de salarios y prestaciones sociales, por lo que la solicitud que realiza la apoderada de dicha Sociedad, resulta infundada, ya que es posible decidir de fondo los derechos reclamados por el actor sin la comparecencia necesaria de la EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA E.S.U. y al MUNICIPIO DE MEDELLÍN, el asunto sin la comparecencia de esta sociedad.

Desde esa perspectiva, pese a que en primera instancia se decidió la desvinculación de la ESU por falta de competencia para conocer el asunto, al no haber agotado el actor el requisito de procedibilidad de la demanda contenido en el art. 6 del CPL y de la SS, esta circunstancia de exclusión de uno de los actores procesales, no le puede ser extensiva a la demandada MISIÓN EMPRESARIAL S.A., no solo porque dicha situación nunca fue alegada en lo transcurrido del proceso, sino porque además, incurre en error al señalar que su vinculación al proceso es como litisconsorte necesario, figura que como ya se analizó, no es predicable de dicho demandado.

Finalmente, en lo que respecta a los alegatos de conclusión presentados por CHUBB SEGUROS, la Sala no hará pronunciamiento alguno, toda vez que esta entidad fue traída a juicio como llamada en garantía de la ESU; pero al haber sido excluida del litigio esta última entidad, el juez de instancia también ordenó la desvinculación de la llamada en garantía.

No habiendo más aspectos por resolver del recurso de apelación, se confirmará el auto apelado, en el sentido que la desvinculación del proceso no le es extensiva MISIÓN EMPRESARIAL S.A. por lo narrado.

Finalmente se condenará en costas a la parte demandada MISIÓN EMPRESARIAL S.A., conforme al mandato del artículo 365 del CGP, aplicable por remisión del 145 del CPTSS, al no haber prosperado su recurso de apelación.

Las agencias en derecho conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$455.000.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL,

RESUELVE:

PRIMERO. CONFIRMAR el auto interlocutorio apelado que resolvió el asunto objeto de la apelación, proferido el día 02 de marzo de 2020 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, dentro del presente proceso.

SEGUNDO. COSTAS a cargo de la demandada MISIÓN EMPRESARIAL S.A. Las agencias en derecho en esta instancia se fijan en la suma de \$455.000.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS.

Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

Se firma en constancia por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **130** del **27 DE JULIO DE 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

FRANCISCO ARANGO TORRES
MAGISTRADO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ
MAGISTRADO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ
MAGISTRADO
TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley
527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **f3869401826ba070555badac33622c378b3b11f334534379eb8715c94c46e03c**

Documento generado en 26/07/2021 02:48:47 PM